

El Chile que queremos

Luego de quince años de sucesivos gobiernos de la Concertación, Chile esta frente a una disyuntiva: o seguimos haciendo más de lo mismo o enfrentamos el futuro con un proyecto político renovado, capaz de avanzar hacia una mayor justicia social y protagonismo ciudadano, que termine con los enclaves autoritarios y dé vida a una propuesta de desarrollo y una política económica que asegure continuidad del crecimiento, bienestar, respeto para las personas y el medio ambiente.

Michelle Bachelet consolida su imagen presidencial; las Fuerzas Armadas se desvinculan del pasado pinochetista de cara a un desarrollo institucional y doctrinario, y los resultados electorales del 31 de octubre constituyen una derrota para la derecha. Al mismo tiempo se expresa una luz de malestar ciudadano, evidenciada en abstención, sufragios blancos o nulos y en un alza de la votación de la izquierda extraparlamentaria.

La Alianza por Chile necesita recuperar un millón de votos, lo que augura una disputa presidencial centrada en contenidos programáticos y en la capacidad de responder a demandas ciudadanas. La derecha intentará tomar las banderas de la equidad y la justicia social, aprovechando que aún tenemos enormes deudas de bienestar con el pueblo.

Debemos trabajar en un programa que enfatice una mejor distribución del ingreso y, en propuestas que diluyan el desencanto en las instituciones democráticas y la política.

La elección de autoridades locales permitió al partido aumentar el número de alcaldes y concejales; pero no captamos la aceptación que despierta Michelle Bachelet. Se evidenció descoordinación en el trabajo de base y la pernicioso influencia del clientelismo tendencial impidió levantar candidatos que hubieran mejorado nuestra votación. Concejales y alcaldes socialistas deben realizar gestiones participativas y transparentes, trabajar con propuestas locales y asegurar el triunfo de nuestra candidata.

Las primarias abiertas garantizan la mejor candidata de la Concertación y las encuestas demuestran que Bachelet es la preferida.

Debemos elegir los mejores hombres y mujeres para el Parlamento, sin que los cupos de senadores y diputados sirvan de moneda de cambio para eventuales apoyos a nuestra candidata presidencial. La Concertación necesita levantar su mejor plantilla para asegurar una mayoría en el Congreso para el nuevo gobierno. Así como proponemos

primarias para designar al o la candidata presidencial, también deben realizarse primarias internas cuando exista más de un postulante a un cupo parlamentario del partido.

El Congreso partidario y la realización de elecciones internas para una nueva dirección son prueba de nuevas prácticas internas y de que los calendarios institucionales deben respetarse. Si ello no ocurre, crecerá el sentimiento de que los canales de legitimación democrática están cerrados. Una elección compromete a quienes participan a aceptar la mayoría, en tanto se haga con reglas elementales de transparencia y democracia. Pedimos para el Partido lo mismo que para Chile: más y mejor democracia.

1. Contexto internacional

Las grandes potencias industriales han remodelado la economía mundial conforme al proyecto neoliberal de globalización corporativa. Prometieron crecimiento económico, progreso tecnológico, altos niveles de vida y prosperidad material; pero la tasa de crecimiento mundial anual ha declinado; la inversión se estanca y el capital privado se ha convertido en capital financiero virtual y especulativo.

El multilateralismo es clave para nuestra actuación internacional. Ya no caben sólo salidas nacionales a problemas que tienen origen global, como la pésima distribución de la riqueza, el deterioro del medioambiente, los flujos migratorios con inestabilidad social, las desregulaciones comerciales indiscriminadas y la anarquía en los flujos de capital. Chile debe apoyar la democratización de los organismos financieros internacionales (FMI y Banco Mundial) para limitar el predominio de Estados Unidos en ellos.

En América Latina y el Caribe cobra fuerza una línea de cambios con expresión en Brasil, Uruguay, Argentina, Bolivia o Venezuela, que tienen en común distintos grados de crítica al orden neoliberal. Chile no puede abstraerse de esta tendencia a la integración, en concordancia con los intereses regionales. El cambio debe sustentarse en democracias participativas, con renovación de instituciones, prácticas políticas, presencia pública en las decisiones; en estados capaces de incidir en áreas estratégicas para el desarrollo, y en la creación de instituciones que entreguen gobernabilidad a sus sociedades.

2. Derechos políticos y ciudadanos

Estamos por un orden más humano, igualitario e integrador, capaz de modificar las condiciones de injusticia social,

explotación y discriminación, derivadas del modelo neoliberal.

El nuevo gobierno debe retomar el sentido original de una Concertación nacida para construir una amplia mayoría por los cambios, respetada y creíble, con un programa de transformaciones vinculado a la visión de país que expresa Michelle Bachelet, con más justicia social, democracia y participación.

La democracia parece sin equilibrio informativo, libertad de opinión y pluralidad de medios, que al estar casi exclusivamente en manos de la derecha, atentan contra la libertad de conciencia. El partido debe lograr mayor influencia cultural en el país.

Nuestra sociedad es heterogénea. Por ello postulamos el respeto a las minorías sociales, étnicas y sexuales, la reparación a los pueblos originarios, la hospitalidad con los inmigrantes, como tributo a un país laico y humanista, que da oportunidades a todos.

3. Fortalecer el sistema político y social

La actual Constitución tiene un sesgo oligárquico que no representa el alma nacional. Proponemos una asamblea constituyente, para la redacción de una nueva Constitución, dotada de un sistema político de democracia proporcional, que garantice los derechos de las mayorías y minorías. Si una minoría es marginada, no tendrá incentivo para participar del juego democrático.

Proponemos la inscripción automática y el voto voluntario. El solo hecho de que los jóvenes puedan votar exigirá que los partidos se pongan a la altura de los tiempos. La forma autoritaria de la democracia actual ha producido una ruptura entre la sociedad y la política.

4. Derechos humanos

Chile nunca más debe vivir las terribles experiencias del pasado. Para ello necesitamos establecer un Defensor Ciudadano como institución independiente y con capacidad de representar a las personas ante el poder del Estado.

No basta con la verdad y la justicia para resolver las violaciones a los derechos humanos, también se requiere de una reparación justa. El Informe Sobre Prisión Política y Tortura constituye un avance, que revela solo una parte de lo ocurrido, y que debe generar justicia y reparaciones dignas.

Una sociedad democrática no humilla a sus ciudadanos. No basta respetar la vida y los derechos de los demás, sino hay que garantizar condiciones de vida digna para miles de

compatriotas y terminar con los irritantes privilegios que la mala distribución de los ingresos provoca.

5. Derechos ciudadanos, transparencia y regulación

Necesitamos transparentar las normas que regulan las actividades económicas privadas en aquellos servicios de utilidad pública. Requerimos una regulación abierta, transparente e informada, con participación ciudadana y de las organizaciones políticas; de una nueva institucionalidad estatal construida con criterios técnicos y políticos, cuya principal preocupación sea la calidad y precio del servicio que las personas reciben en salud, previsión, educación, agua potable, gas, electricidad, puertos, obras públicas o transporte.

Aspiramos a ampliar atribuciones de las asociaciones de consumidores, aumentar los medios para que SERNAC ejerza mayor fiscalización y dar suma urgencia al proyecto de ley que crea el Defensor del Ciudadano, organismo autónomo encargado de velar por la promoción y resguardo de los derechos de las personas.

6. Regionalización, medioambiente, calidad de vida y pueblos originarios

El Chile del Siglo XXI debe repensar su territorio, para que sus vínculos internacionales y la calidad de sus ciclos productivos adquieran significado. Su estrategia incluye considerar el mar como una bisagra hacia el mundo. Es necesario pensar macro regiones que expresen la potencia endógena que ha alcanzado el país luego de las transformaciones de estos años.

Los esfuerzos para descentralizar y promover el equilibrio entre las regiones requieren de la reestructuración geográfica de los procesos productivos, para facilitar un desarrollo espacial equilibrado y no una mera descentralización administrativa que entregue cuotas de poder a elites regionales, cuyo origen no está en la sociedad local.

Proponemos planes de desarrollo regional armónicos y sustentables, que tomen en cuenta las particularidades de cada región, provincia o comuna, con un gradual traspaso de recursos y decisiones hacia regiones, en la perspectiva de que los Consejos Regionales sean electos por voto directo. Existe un vínculo directo entre las condiciones ambientales, las desigualdades y el centralismo. La salud o calidad de vida de muchas comunidades se ve impactada por proyectos

industriales, basurales, rellenos sanitarios, aeropuertos, autopistas, inundaciones, aluviones o sequías, cuyos diseños no incluyen los temas ambientales.

El deterioro del medioambiente está condicionado por un modelo de desarrollo, caracterizado por segregación territorial, creciente desregulación de los usos del suelo, menor intervención estatal directa en vivienda, obras públicas, vialidad, transporte o espacios comunitarios..

El modelo económico actual impone una fuerte carga ambiental sobre recursos no renovables, especies en peligro de extinción y destrucción de ecosistemas biológicos o culturales. Para materializar nuestra propuesta se requiere una nueva legislación ambiental y la búsqueda de fuentes de energía limpia y renovable.

La diversidad étnica es patrimonio cultural y base de nuestra identidad. No puede ser abolida por ignorancia política o por un modelo autoritario. Apoyamos el desarrollo de los pueblos originarios, fortaleciendo sus derechos, formas de organización, acervo cultural, lenguas, el respaldo del Estado para la compra de tierras, el fomento de la actividad comercial a cualquier escala de productores indígenas, y la enseñanza en la escuela de sus culturas y lenguas.

7. Justicia, seguridad ciudadana y combate a delincuencia

Debemos perseverar en la transformación de la justicia que implicó la reforma procesal penal, sin dar pasos atrás en competencias para los fiscales nacionales que impliquen que los principios de garantía y oralidad de los procesos desaparezcan bajo una supuesta mayor rigurosidad de la ley penal.

Necesitamos una reforma judicial extendida a la justicia civil, que se haga cargo de los retardos de los procesos judiciales, afectando sobre todo a personas que carecen de recursos.

La política criminológica del Estado ha privilegiado una política que pone el acento en la represión, la cárcel y la estigmatización de los sectores populares. El robo callejero es más grave para el interés de la sociedad que el fraude financiero millonario; ambos casos merecen ser sancionados por igual. Debemos centrarnos más en la prevención y rehabilitación que en la cárcel.

8. Educación, cultura, salud, ciencia y tecnología

Para Chile no hay futuro sin una revolución profunda en la formación de sus recursos humanos. Su dimensión de escala

y la apertura de su economía lo empujan hacia los servicios y las actividades económicas de alta composición tecnológica y sincronización temporal. De ahí que la educación se constituya en el eje central del desarrollo, con amplia cobertura, calidad y bajo costo, no discriminatoria y capaz de armonizar el ciclo formal con los de capacitación y trabajo.

Debemos terminar con las brechas de discriminación y calidad reforzando el apoyo a colegios con alumnos de mayor vulnerabilidad social, aumentar el presupuesto de la educación preescolar y fiscalizar la calidad de la enseñanza.

La incorporación de valor en la producción requiere un incremento sostenido en investigación y una política nacional de desarrollo científico y tecnológico, en la que intervengan gobierno, universidades y empresas.

La cultura no puede constituir un agregado ocasional en la transformación del país. Va desde un desarrollo de las redes digitales públicas con información, hasta el hábito de lectura o la recreación y el ocio como base de una relación con la estética y la verbalización de nuestras creencias. Es necesario devolverle oralidad cultural al espacio público, con mayor seguridad y estética. Ese logro pasa por entender las expresiones de vanguardia entre los jóvenes, darles espacio, incentivar la creación, e inhibir sus impulsos destructivos y la violencia que trata de infiltrarse en ellas.

El ocio constructivo pasa por el uso pacífico y recreativo de la ciudad. De ahí la importancia de luchar por una urbe integrada, con espacios verdes y barrios capaces de contener deporte y recreación.

La Salud Pública debe ser solidaria, moderna, equitativa, oportuna y de calidad; con énfasis en la prevención; guiada por el concepto de la salud como derecho; gestionada desde el Estado, con una adecuada regulación de las actividades desarrolladas por el sector privado. El sistema actual reserva las Isapres para personas de ingresos medios y altos o para jóvenes y sanos, y deja al sector público la salud de los pobres, las mujeres en edad fértil, la tercera edad y las enfermedades catastróficas sin cobertura de seguros.

9. Trabajo, previsión, pequeña empresa y empleo

El país necesita de una ética de la producción y del trabajo, con una legislación que fortalezca los derechos laborales y sindicales, que proteja a los trabajadores y trabajadoras temporales e independientes. De igual manera, no corresponde imponer una flexibilidad laboral que contribuya

a precarizar aún más los mercados laborales, eliminando su poder de negociación. En una sociedad democrática, el valor del trabajo debe expresarse en el mercado laboral de manera simétrica al poder de los patrones.

El trabajo sin previsión es intolerable. Se requiere un cambio en la estructura del sistema previsional. Más del 50% de los futuros jubilados hasta el año 2010 recibirán una pensión mínima o subsidiada por el Estado y el sistema corre el peligro de colapsar debido a los elevados gastos de las empresas administradoras. Resulta imprescindible crear mecanismos que den competitividad al mercado, bajen los costos y las comisiones de administración de los fondos, incluida la posibilidad de crear una AFP pública.

El encadenamiento productivo al nudo moderno de nuestra economía de las micro y pequeñas empresas, que proporcionan sobre el 70% de los empleos resulta fundamental para hacer sustentable y equilibrado nuestro desarrollo. Las entidades financieras, entre ellas el Banco del Estado, deben generar créditos para este sector, con tasas de interés similares a las que ofrece a grandes empresas.

10. Financiamiento y transparencia

La política de superávit fiscal de 1% permitió realizar inversiones en momentos de crisis con ligeros déficit en las cuentas fiscales. No obstante, hoy se dispone de 17.000 millones de dólares como reservas y la deuda pública no pasa los 4.000 millones de dólares. Resulta incomprensible que se mantenga una política restrictiva que en fin de cuentas financia proyectos de otros países. La política fiscal debe priorizar la inversión en programas nacionales, que tengan como límite una proporción pequeña de endeudamiento, ampliamente respaldada por las reservas nacionales.

Empresas e inversionistas privados deben pagar impuestos proporcionales a sus utilidades reales, evitando la elusión y evasión, con el objeto de destinar estos recursos fiscales a la solución de los problemas de los sectores más carentes.

Es urgente limitar regímenes especiales, exenciones, deducciones, créditos, dilaciones y tasas reducidas de los tributos, que se aplican tanto a los impuestos a la renta como al IVA, como la franquicia que permite diferir el pago de impuestos por la vía de aplicar depreciación acelerada, para las grandes empresas; el derecho a diferir impuestos por la amortización de activos intangibles; el crédito especial a las

empresas constructoras, que tienen derecho a imputar contra el IVA.

Las empresas mineras privadas deben pagar al Fisco una renta proporcional a las riquezas no renovables que extraen. El royalty a la extracción de recursos mineros debe ser, a lo menos, igual al porcentaje propuesto por el gobierno del Presidente Ricardo Lagos y los ingresos por este concepto deben destinarse a proyectos de desarrollo en las regiones.

Epílogo

Los desafíos que enfrenta el partido son enormes. En la misma medida que una militante es la candidata favorita de los chilenos para ocupar la presidencia de la República en marzo de 2006. Hoy tenemos la responsabilidad histórica de convertir al Partido en una organización abierta a los ciudadanos y ciudadanas, democrática, representativa de las mayorías nacionales y capaz de impulsar las transformaciones necesarias para tener un Chile más igualitario. El nuevo gobierno puede ser el inicio de una segunda transición y que ello ocurra depende en gran medida de lo que hagamos los socialistas.

Rafael Urriola
Luis Sierra
Matías Salazar
Cecilia Merino
Luis Lobos
Eduardo Giesen
Eduardo Gutiérrez
Mario Flores
Santiago Escobar
Enrique Ceppi
Hugo Bordoli
Rubén Andino

Diciembre de 2004